



Procedimiento Administrativo

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO RELATIVA A LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN AL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2005 DOS MIL CINCO, PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.**

Visto el dictamen definitivo emitido por la Comisión Revisora del Financiamiento Público de los Partidos Políticos del antes Instituto Electoral del Estado de Jalisco, respecto del informe financiero correspondiente al segundo semestre de 2005 dos mil cinco, presentado por el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, y

**RESULTANDO**

1º Con fecha **10 diez de mayo de dos mil cinco** se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" los decretos números 20905 veinte mil novecientos cinco y 20906 veinte mil novecientos seis aprobados por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales se reformaron la Constitución Política y la Ley Electoral, ambos ordenamientos de esta entidad federativa, creando al Instituto Electoral del Estado de Jalisco y definiendo su estructura y atribuciones.

2º En sesión **extraordinaria** de fecha **28 veintiocho de julio de dos mil cinco**, el Pleno del otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo mediante el cual modificó sus reglamentos y normatividad interna, a efecto de ajustarlos a lo señalado en los decretos 20905 veinte mil novecientos cinco y 20906 veinte mil novecientos seis aprobados por el Congreso del Estado de Jalisco, acuerdo del organismo electoral que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día dos de agosto de dos mil cinco.

3º Con fecha **01 uno de diciembre del 2005 dos mil cinco** se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el plazo para la presentación de los informes financieros semestrales correspondientes al segundo semestre del 2005 dos mil cinco.

4º El día diecinueve de diciembre de 2005 dos mil cinco, le fue notificado al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, mediante oficio número 437/05 Secretaría

Página 1 de 27



Ejecutiva, de fecha 16 dieciséis de diciembre de 2005 dos mil cinco, recordatorio de la obligación de presentar su informe financiero semestral correspondiente al segundo semestre de 2005 dos mil cinco.

5° Con fecha 17 diecisiete de enero de 2006 dos mil seis, el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** presentó su informe financiero semestral sobre el origen y destino de los recursos de los partidos políticos correspondiente al segundo semestre del año 2005 dos mil cinco.

6° La Otrora Comisión Revisora, mediante oficio número 007/06 CRFPP de fecha 23 **veintitrés de enero de 2006 dos mil seis**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 33 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 82 de la Abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, instruyó al Secretario Ejecutivo para que solicitara por oficio al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** documentación comprobatoria de la veracidad de lo reportado en su informe financiero correspondiente al segundo semestre del 2005 dos mil cinco.

7° Con fecha 24 **veinticuatro de enero de 2006 dos mil seis**, mediante oficio número 0367/06 Secretaría Ejecutiva, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 82 párrafo tercero de la Abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, y 32 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, notificó al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** la fecha de entrega y recepción de la documentación requerida, consistente en:

1. Estados Financieros mensuales correspondientes al periodo sujeto a revisión.
2. Movimientos auxiliares de catálogo, mensuales correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2005 dos mil cinco.
3. Diario cronológico a detalle correspondiente al periodo sujeto a revisión.
4. Pólizas de diario, ingresos, egresos y cheque, con documentación comprobatoria anexa, correspondientes al periodo sujeto a revisión; en caso de existir cheques cancelados proporcionarlos en copia simple con la firma del responsable de finanzas y presentar los originales para su cotejo.
5. Consecutivo de recibos de ingresos correspondientes al periodo sujeto a revisión, en caso de existir recibos cancelados proporcionarlos en copia simple con la firma del responsable de finanzas, presentar los originales para su cotejo.
6. Estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo sujeto a revisión.
7. Conciliaciones bancarias mensuales correspondientes al periodo sujeto a revisión.



8. Concentrado anual de aportaciones por cada militante y simpatizante correspondiente al ejercicio 2005 dos mil cinco.
9. Detalle de aportaciones de militantes y simpatizantes correspondiente al periodo sujeto a revisión, por medios magnéticos.
10. Consecutivo de recibos de servicios personales correspondientes al periodo sujeto a revisión, en caso de existir recibos cancelados proporcionarlos en copia simple con la firma del responsable de finanzas, presentar los originales para su cotejo.
11. Copia de las credenciales de elector de las personas a quienes les haya otorgado reconocimientos y apoyos por concepto de servicios personales durante el periodo sujeto a revisión.
12. Padrón de proveedores del partido, mismo que deberá integrarse de conformidad con lo previsto por los artículos 38 al 42 de la Ley de adquisiciones y enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco; y del 49 al 55 del Reglamento de la Ley antes citada.
13. Control de inventarios de activos fijos al 31 treinta y uno de diciembre de 2005 dos mil cinco, mismo que deberá incluir el bien mueble o inmueble, numero de inventario, ubicación e importe en libros, detallando los bienes que fueron adquiridos con financiamiento público.

8º Con fecha **8 ocho de febrero de 2006 dos mil seis** se desahogó en las oficinas que ocupa el Personal Técnico de la otrora Comisión Revisora del Financiamiento a los Partidos Políticos del otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, la diligencia de entrega y recepción de la documentación solicitada en los términos de lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Habiéndose levantado acta circunstanciada de todos los hechos que ocurrieron durante el desarrollo de la diligencia de entrega y recepción de la documentación solicitada, firmando por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, la cual obra en el expediente respectivo.

9º Con fecha **29 veintinueve de septiembre de 2006 dos mil seis**, una vez desahogado el procedimiento, esta Comisión Revisora del Financiamiento a los Partidos Políticos emitió el dictamen preliminar respecto de la revisión de los informes financieros correspondientes al segundo semestre del año dos mil cinco del **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**.

10º Con fecha **26 veintiséis de octubre de 2006 dos mil seis** y mediante oficio número **100/2006 CRFPP**, se notificó al partido político sujeto al presente procedimiento de revisión, el dictamen preliminar a efecto de que en atención a su derecho público subjetivo previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en un plazo improrrogable de 15 quince días, realizara las manifestaciones que a su derecho resultasen



convenientes y aportara los medios de convicción que estimara convenientes, plazo que feneció el día 17 diecisiete de noviembre de dos mil seis.

11° Con fecha 17 diecisiete de noviembre de dos mil seis, el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** presentó escrito de contestación al dictamen preliminar relativo a la revisión del informe financiero correspondiente al segundo semestre del año dos mil cinco, otorgando con esto las aclaraciones que consideró pertinentes a efecto de desvirtuar las observaciones realizadas en dicho dictamen.

12 ° Con fecha 14 catorce de marzo de dos mil siete y mediante oficio 030/2007 Comisión Revisora, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 63, fracción XIII y 82 de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, así como 2, 18, 33 y 37 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, otrora Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos notificó al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** las observaciones, omisiones técnicas y posibles faltas administrativas detectadas en el procedimiento de revisión del informe financiero correspondiente al segundo semestre de dos mil cinco y le solicitó manifestara lo que a sus interés considerara conveniente, otorgándole, para al efecto, un plazo de 15 quince días hábiles contados a partir del día siguiente en que recibiera la notificación, y formulara las aclaraciones pertinentes.

13° Con fecha 19 diecinueve de abril de 2007 dos mil siete, el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, por conducto de su secretario de administración y finanzas, presentó ante la Oficialía de Partes del otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, escrito por medio del cual otorgó respuesta al oficio de otrora Comisión Revisora señalado en el párrafo que antecede; por lo que, se procedió a desahogar en las oficinas que ocupa el Personal Técnico de la otrora Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos del entonces Instituto Electoral del Estado de Jalisco, la diligencia de entrega y recepción de la documentación solicitada mediante el oficio número 030/2007 Comisión Revisora, en los términos de lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Habiéndose levantado acta circunstanciada de todos los hechos que ocurrieron durante el desarrollo de la diligencia de entrega y recepción de la documentación solicitada, firmando por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, la cual obra en el expediente respectivo.

14° Con fecha 10 diez de agosto de 2007 dos mil siete una vez desahogado el procedimiento, la otrora Comisión Revisora del Financiamiento a los Partidos Políticos emitió



el dictamen definitivo respecto de la revisión de los informes financieros correspondientes al segundo semestre del año dos mil cinco del **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**.

Dicho dictamen contiene los hechos y las omisiones, así como las conclusiones que, a juicio de la otrora Comisión Revisora del Financiamiento a los Partidos Políticos, se consideraron como presuntas irregularidades cometidas, en los términos de lo dispuesto por la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco y el reglamento de la materia, concluyendo con esto el procedimiento de revisión correspondiente ante dicha Comisión Revisora.

15° La otrora Comisión Revisora, mediante el oficio número **082/2007** Comisión Revisora de fecha diez de septiembre de dos mil siete, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 82 de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, remitió al Secretario Ejecutivo el dictamen definitivo del **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** para efecto de ser presentado ante el Pleno del otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, para que resuelva sobre su procedencia y en su caso determine las sanciones que procedan.

16° En sesión ordinaria celebrada con fecha **28 veintiocho de noviembre de 2007 dos mil siete** el Pleno del otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, aprobó el acuerdo **ACU-044/2007**, mediante el cual se tuvo por recibido el dictamen definitivo emitido por la otrora Comisión Revisora de Financiamiento de los Partidos Políticos de fecha diez de agosto de dos mil siete, ordenándose el emplazamiento del **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, al procedimiento administrativo sancionador previsto por el artículo 350 de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, para lo cual se determinó la integración del expediente administrativo número **PA/RFP/002/2007**.

17° Una vez transcurrido el plazo legal a que se refiere el artículo que antecede, este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, procedió a verificar en los registros de la oficialía de partes y los archivos de este organismo electoral, la existencia de la respuesta efectuada por el instituto político con motivo del emplazamiento que le fue realizado, encontrándose que con fecha **13 trece de diciembre de 2007 dos mil siete**, el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, compareció al procedimiento administrativo que le fue instaurado, mediante la presentación de un escrito al cual le correspondió el número de folio 1309 de Oficialía de Partes de este organismo electoral.

18° Con fecha **5 cinco de julio de 2008 dos mil ocho** fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el decreto número **22228/LVIII/08** aprobado por el Congreso del



Estado de Jalisco, mediante el cual se reformaron los artículos 12, 13, 18, 20, 24, 35, 38, 42, 57, 70, 73 y 75 y se adicionó el artículo 116 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, creando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Mediante este Decreto de reforma de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se creó entre otros, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos como un órgano técnico del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dotado de autonomía de gestión para la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, con lo que suprimió a otrora Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos.

19º Con fecha **5 cinco de agosto de 2008 dos mil ocho** fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el decreto número 22272/LVIII/08 aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual ratifica el diverso 22271/LVIII/08 que expide el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, abrogando tanto la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco como la abrogada Ley de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y cuyo artículo Quinto Transitorio de dicho Código dispone que los asuntos que se encontraran en trámite a su entrada en vigor deben ser resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

20º En sesión celebrada con fecha **12 doce de diciembre de 2008 dos mil ocho**, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo identificado con clave ACU-067/2008 integró la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y designó al ciudadano que fungirá como su Director General, por lo que

### CONSIDERANDO

I. Que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco es un organismo público de carácter permanente, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, autoridad en la materia electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 12, bases III y IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y 116, párrafo 1, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

El referido organismo electoral tiene a su cargo en forma integral y directa, entre otras, las actividades relativas a las prerrogativas de los partidos políticos, tal como lo establece la base VIII, del artículo 12, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.



Asimismo tiene como objetivos, entre otros, vigilar, en el ámbito electoral, el cumplimiento de la Constitución Política local, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y demás ordenamientos que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos, en los términos de lo dispuesto por la fracción V, del párrafo 1, del artículo 115, del citado código electoral.

II. Que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, responsable del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del instituto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 12, base IV de la Constitución Política local; y 120 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

III. El citado Consejo General del Instituto tiene la atribución, entre otras, de vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y disposiciones que con base en ella se dicten; conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134, fracciones XXII y LI, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

IV. Que los partidos políticos son entidades de interés público, cuya finalidad consiste en promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida política y permitir el acceso de éstos, a la integración de los órganos de representación estatal y municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 13, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 36 párrafo 1 de la legislación electoral de la entidad.

V. Que los partidos políticos registrados o acreditados ante el organismo electoral tienen derecho a percibir financiamiento público y privado para el desarrollo y promoción de sus actividades en la vida política del Estado, tal como lo disponen los artículos 13, fracción IV de la Constitución Política local, 89, fracción 1 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

VI. Que, tal como fue señalado en el punto 14º del capítulo de resultandos de esta resolución, con fecha **10 diez de agosto de 2007 dos mil siete**, la otrora Comisión Revisora del Financiamiento a los Partidos Políticos del antes Instituto Electoral del Estado de Jalisco emitió dictamen definitivo correspondiente a los informes financieros sobre los ingresos y egresos de las campañas políticas presentados por el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, en relación al informe financiero correspondiente al segundo semestre de 2005 dos mil cinco, presentado por el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**.



VII. Que, tal como fue señalado en los puntos 18° y 19° del capítulo de resultados de esta resolución, mediante decretos 22228/LVIII/08 y 22272/LVIII/08 aprobados por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, se reformaron diversos artículos y se agregó uno de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y se expidió el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, teniendo como consecuencias, entre otras: la abrogación de la Ley Electoral del Estado de Jalisco; la transformación del Instituto Electoral del Estado de Jalisco en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; y la modificación de las reglas para la fiscalización y aplicación de sanciones por infracciones relacionadas con este tema.

Además, por medio del decreto 22228/LVIII/08 de reforma de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se creó entre otros, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos como un órgano técnico del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, dotado de autonomía de gestión para la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, con lo que suprimió a la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos.

Sin embargo, el artículo quinto transitorio del decreto 22272/LVIII/08 emitido por el Congreso del Estado, establece que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del decreto, deben ser resueltos conforme a las abrogadas Leyes vigentes al momento de su inicio.

En este sentido, con la finalidad de hacer frente a las responsabilidades legales conferidas a este Instituto Electoral, como es la fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los partidos políticos y asegurar la resolución del procedimiento administrativo sancionador instaurado, el desahogo del presente procedimiento corresponde al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Para tal efecto y de conformidad con lo establecido por el artículo Quinto transitorio del decreto 22272/LVIII/08 citado anteriormente, las actuaciones de la extinta Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, los reglamentos aprobados por el otrora Pleno del organismo electoral, deberán entenderse como propias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

Lo anterior obedece al hecho de que los informes financieros relativos al segundo semestre de 2005 dos mil cinco presentados por los partidos políticos corresponden al ejercicio del año 2005 dos mil cinco, siendo así, lo procedente es aplicar las normas sustantivas vigentes en ese año, sin que ello signifique una aplicación retroactiva, ya que para que una ley se considere como tal, requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores.



Toda vez que es de explorado derecho, que debe ser aplicado el cuerpo legal vigente al momento de la realización de los hechos motivo del análisis, ya que realizar lo contrario, significaría infringir lo previsto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imposibilita la aplicación de una ley de manera retroactiva en perjuicio de los partidos políticos.

En consecuencia, por lo que respecta a la competencia y órganos encargados del procedimiento de revisión de los informes financieros referidos, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12, fracción XII, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 91, párrafo primero, del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco se integró la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, la cual tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que presenten los partidos respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como sobre su destino y aplicación. En consecuencia, este órgano técnico es competente para llevar a cabo el procedimiento de revisión de los informes de ingresos y gastos que presenten los partidos políticos.

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 12, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 4, párrafo primero, 37, párrafo segundo, 69, 134, párrafo primero, fracciones VIII y XXII del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y 40 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, vigentes durante el periodo en revisión, es facultad del Consejo General de este Instituto conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes a las violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios que se acrediten en la revisión de los informes financieros relativos al segundo semestre de dos mil cinco que presentaron los partidos políticos.

**VIII.** Que, tal como se señaló en el punto 2º de los **resultandos** de la presente, el entonces Pleno del Instituto Electoral del Estado de Jalisco modificó los reglamentos y normatividad interna del organismo electoral, a efecto de ajustarlos a lo señalado en los decretos 20905 y 20906 aprobados por el Congreso del Estado de Jalisco.

En este sentido el “Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Consejo Electoral del Estado de Jalisco”, fue reformado para quedar como “Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco”. Asimismo, el articulado del reglamento en comento fue



reformado a efecto de que todas las referencias al organismo electoral, señalen al Instituto Electoral del Estado de Jalisco.

Con base en lo anterior y tomando en consideración que el reglamento antes citado es una norma reguladora de los procedimientos de revisión de los informes financieros de los partidos políticos basado en lo dispuesto por el artículo 82 de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, que las reformas antes mencionadas estuvieron vigentes desde el día tres de agosto del año dos mil cinco y que éstas no violan ni suprimen derechos otorgados a los partidos políticos, resulta aplicable al caso que nos ocupa el “Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco”.

**IX.** Que, como lo disponían los artículos 13, fracción IV de la Constitución Política local, 62, fracción II, 72, 75 y 77 de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, los partidos políticos registrados o acreditados ante el organismo electoral tienen derecho a percibir financiamiento público y privado para el desarrollo y promoción de sus actividades en la vida política del Estado.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 72 y 78 de la legislación electoral estatal abrogada a partir del día cinco de agosto de dos mil ocho, los partidos políticos podían percibir financiamiento privado, sujetándose a las modalidades y limitaciones señaladas en la propia abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, establecía.

**X.** Que, como entidades de interés público, la revisión del origen y destino del financiamiento a los partidos políticos es una función prioritaria que corresponde desempeñar al órgano electoral, ya que la forma como sea utilizado su financiamiento afecta la credibilidad y la confianza que los ciudadanos depositan en los institutos políticos en su carácter de organizaciones democráticas, por lo que una demanda sentida de la sociedad ha sido el uso transparente de sus recursos económicos.

**XI.** Que la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, en sus artículos 72, 73, 75, 76, 77, 78, 82, 132, fracciones XXVI y XXXIII, 348, fracción IV, 349, fracción II y 350, previa:

- a) La regulación de las modalidades del financiamiento que podían percibir y ejercer los partidos políticos;
- b) Los medios para que la autoridad electoral fiscalice el origen y destino del financiamiento de los partidos políticos; y
- c) En su caso, la imposición de las sanciones que correspondan por contravenciones a la legislación electoral y su reglamentación en materia de financiamiento de los partidos políticos.



XII. Que, como se desprende de las actuaciones desahogadas por la extinta Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos y en concordancia con la legislación electoral vigente, dicho órgano técnico, agotó la totalidad de las atribuciones a su cargo, previstos por el artículo 82, párrafos segundo, tercero y cuarto de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, así como las etapas procesales contempladas por el Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 39 del referido reglamento de la materia, el procedimiento de revisión al informe financiero relativo al segundo semestre de 2005 dos mil cinco, presentado por el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** se encuentra total y definitivamente concluido.

XIII. Que, con la remisión del dictamen definitivo por parte de la extinta Comisión Revisora de los Recursos de los Partidos Políticos al órgano superior de dirección del Instituto Electoral, según lo previa el artículo 40 del reglamento de la materia, dio inició el procedimiento administrativo que se encontraba contemplado por el artículo 350 de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco y que ahora nos ocupa.

XIV. Que en la especie, el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** fue emplazado con apego en lo dispuesto por el artículo 350, fracción I de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, con fecha tres de diciembre de dos mil siete a través de oficio 0933/07 Secretaría Ejecutiva, venciendo el plazo para que compareciera al presente procedimiento administrativo, el día trece de diciembre de dos mil siete.

XV. Que el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** compareció oportunamente al procedimiento administrativo instaurado en su contra, en términos del artículo 350, fracción I de la abrogada legislación estatal electoral, toda vez que el plazo para que diera contestación a los señalamientos que le fueron formulados en el dictamen definitivo del informe financiero del segundo semestre de 2005 dos mil cinco, transcurrió entre los días cuatro, cinco, seis, siete, diez, once, doce, y trece de diciembre de dos mil siete; y el instituto político, por conducto de quien tiene el carácter de secretario de administración y finanzas del comité directivo estatal ante el organismo electoral, dio respuesta al emplazamiento a través de escrito presentado con fecha trece de diciembre de dos mil siete ante la Oficialía de Partes del instituto electoral donde fue registrado con folio 1309.

XVI. Una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, y en congruencia con el artículo 482 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para la imposición de las sanciones correspondientes, el Consejo General, tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, entendiéndose por circunstancias: el tiempo, modo y lugar en el que se produjo la falta. Para determinar la



gravedad de la falta, se analizará la trascendencia de la conducta en relación con la norma transgredida y los efectos que genere respecto de los bienes jurídicamente tutelados; y en caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa.

Al respecto, en el sistema administrativo sancionador electoral, es necesario tomar en consideración las reglas y principios para su fijación e individualización, las cuales se desprenden de la tesis de jurisprudencia con la clave S3ELJ 24/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación:

**"SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—**

*La responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levisima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.*

*Tercera Época:*



*Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de julio de 2001.—Unanimidad de votos.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.*

*Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2003.*

*Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296."*

De la tesis de jurisprudencia en cita, se desprende lo siguiente:

A) La responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del **IUS PUNIENDI**, y consiste en la imputación o atribubilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente; lo anterior es así, ya que el sentido de extraer los principios desarrollados por el derecho penal, es con la finalidad de adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, siempre que no se opongan a sus particularidades, ésto es cambiar lo que debe ser cambiado, cuyo origen proviene del latín **MUTATIS MUTANDIS**.

B) La máxima **IN DUBIO PRO REO**, la cual significa que en ausencia de prueba plena debe absolverse al reo, es decir, que la sentencia condenatoria debe apoyarse en situaciones objetivas que produzcan certeza en el ánimo del juzgador y no ir más allá de lo que los medios de prueba no justifican.

C) El principio de **NON BIS IN IDEM**, cuyo significado básicamente consiste en que, un mismo hecho no podrá ser objeto de dos procesos distintos, principio que incluso lo contempla el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer en su parte conducente que "...Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene"; en tales circunstancias, dentro del procedimiento administrativo sancionador, dicho principio radica esencialmente en que aunque determinadas conductas pudieran constituir infracciones independientes (tomadas en lo individual), se vinculan por afectar un mismo objeto y lesionar o poner en riesgo el mismo bien jurídico, entonces, esos distintos hechos no deben apreciarse de manera individual e independiente, sino relacionarse entre sí, como elementos constitutivos de una infracción de mayor entidad o de naturaleza compleja, y así deben ser ponderadas en dicho procedimiento.

D) El principio de **NON REFORMATIO IN PEJUS**, que significa no revisar para empeorar, por lo que debemos entender que si se revisa es para aminorar la pena, pero podemos ampliar su concepto en el sentido de entender que la resolución no puede ser



modificada en perjuicio del acusado, en la clase y extensión de sus consecuencias jurídicas, cuando sólo han recurrido el acusado o su representante legal.

En este orden de ideas, es primordial abordar la tipicidad, la cual consiste en que el supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho, además de que la norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en forma escrita, a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia; este principio garantiza a su vez el mandato tutelado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la imposición de sanciones por simple analogía o por mayoría de razón, que no estén decretadas por una ley exactamente aplicable al ilícito de que se trate.

Asimismo, también es correcto afirmar que en todo procedimiento, incluyendo el administrativo sancionador, debe estar presente el derecho de contradicción, a fin de que el inculpado o procesado obtenga la decisión justa del litigio que se le plantea o de la imputación que se le formula, mediante la sentencia que debe dictarse en ese proceso, luego de tener oportunidad de ser oído en igualdad de circunstancias, para defenderse, alegar o probar lo que estime conveniente.

Bajo este tenor, se debe determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si se alcanza o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática.

Para el caso de que la sanción contemple un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias del caso particular.

A fin de determinar la gravedad de la falta, se deberá analizar, en su caso, la comisión reiterada o sistemática de la conducta, la trascendencia de la norma transgredida, los efectos que produce la transgresión respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho, así como la capacidad económica del partido, las circunstancias especiales, y para el caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa.

Para efectos del párrafo que antecede, se precisa lo siguiente:

La **comisión reiterada o sistemática**, surge cuando la falta cometida por el partido sea constante y repetitiva en el mismo sentido a partir de las revisiones efectuadas en distintos ejercicios.



Por **circunstancias especiales**, se debe entender el especial deber de cuidado de los partidos políticos o coaliciones derivado de las funciones, actividades y obligaciones impuestas por la legislación electoral o que desarrollan en materia político-electoral, así como la mayor o menor factibilidad de prever y evitar el daño que se hubiere causado.

Por su parte, la **reincidencia**, se genera cuando existe repetición de la falta por la cual el partido ha sido sancionado en ejercicios previos.

Ahora bien, este Órgano Electoral se apegará estrictamente al criterio adoptado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente, al adoptado en la resolución identificada con la clave SUP-RAP-01/2007, donde se establecen los **elementos esenciales que sirven como base para graduar la sanción**, siendo éstos los siguientes:

**1. Los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de la falta cometida.**

La acreditación de conductas ilícitas cometidas por los partidos políticos violentan los principios sustanciales fundamentales en materia de fiscalización y de financiamiento de partidos políticos, al grado de impedir el efectivo ejercicio regular de la facultad de fiscalización de la autoridad electoral y por otro, impedir la adquisición de certeza y transparencia de la veracidad de lo reportado en los informes financieros.

**2. La conducta y la situación del infractor en la comisión de la falta.** Existen dos tipos de conductas ilícitas y sancionables en los procedimientos administrativos como el que nos ocupa, que son: el de acción y el de omisión. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 23ª. Edición señala que la palabra acción proviene del latín *actio*, *-ōnis*, y significa “*ejercicio de la posibilidad de hacer*” o “*resultado de hacer*”. Asimismo, señala que la palabra omisión proviene del latín *omissio*, *-ōnis*, y significa “*abstención de hacer o decir*” o “*falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado*”. Con base en lo anterior, es dable señalar que el órgano electoral esta obligado a determinar el tipo de la conducta irregular realizada por los partidos políticos, es decir, de acción u omisión.

**3. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución.** Cuando se ejerce la función administrativa sancionadora, no basta con que se narren genéricamente en la resolución los hechos que a juicio del órgano electoral actualicen dicha causal, sino que es necesario expresar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron. Lo anterior no sólo para que el partido afectado pueda preparar su contestación y defensa, sino también para que las pruebas se ofrezcan y rindan en relación precisa con la litis establecida y para que el examinador pueda estudiar la procedencia de la acción intentada.



4. **La intencionalidad o negligencia del infractor.** El procedimiento de revisión, que comprende el desarrollo de una amplia y rigurosa metodología de revisión, implementada conforme al Capítulo de metodología que queda asentado en los propios dictámenes definitivos; procedimiento de revisión dentro del cual, los partidos políticos tienen la posibilidad de formular aclaraciones y comprobaciones que les resulten pertinentes y en particular de ver respetada su garantía de audiencia y defensa dentro del procedimiento de revisión. Sin embargo, si se confirma que un determinado partido político, tuvo pleno conocimiento de las infracciones atribuibles a éste y sus consecuencias legales y, a su vez, que contó con varias oportunidades para corregirlas o desvirtuarlas, sin embargo, éste no aportó documentación u otros elementos adicionales a los solicitados que considere pertinentes para la adecuada revisión de los informes financieros, ni se realizó señalamiento alguno para desvirtuar, corregir o justificar las observaciones, es dable considerar como negligente la conducta del partido político, siendo evidente que actuó con intencionalidad manifiesta al persistir en su conducta infractora, pues no realizó manifestación alguna, a pesar de contar con pleno conocimiento de las etapas que comprende el procedimiento de revisión y las diversas oportunidades claramente diferenciadas, en las cuales, como ya se dijo, los partidos políticos pueden hacer aclaraciones, alegaciones y en su caso, aportar documentos para subsanar las irregularidades que se hayan observado en el procedimiento de revisión.

5. **La reincidencia en la conducta.** Para efectos de determinar la sanción aplicable por la comisión de la falta administrativa, el Consejo General debe tomar en consideración los antecedentes de infracción, los cuales pueden generar reincidencia, ya que las reincidencias en una misma conducta irregular son consideradas como agravantes y causarán que las sanciones sean aumentadas por cada ocasión en que el partido político reincida en la misma conducta, clasificando la sanción en un parámetro mayor.

6. **Si es o no sistemática la infracción.** Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 23ª. Edición, señala que se actúa de manera sistemática o por sistema cuando se procura obstinadamente hacer siempre algo en particular, o hacerlo de cierta manera sin razón o justificación. Por lo que, el Consejo General debe valorar las constancias que obren en el procedimiento sancionador, para efectos de determinar que el partido político actuó o no, de manera sistemática al momento de cometer la infracción que se atribuye.

7. **Si existe dolo o falta de cuidado.** Por dolo se entiende a la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. Comete una conducta dolosa quien concientemente realiza actos que rebasan los límites permitidos. Por ello, un error provocado por la acción de un instituto político y que cuyo comportamiento lleva la intención de ocasionar un daño, a sabiendas que como consecuencia de sus actos se origine ese menoscabo, debe ser considerado por la autoridad electoral como agravante al momento de fijar la sanción.



8. Si hay **unidad o multiplicidad de irregularidades**. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva (conducta y situación del infractor en la comisión de la falta), y previo a que la autoridad proceda a determinar la sanción, toca identificar si existe singularidad o pluralidad de conductas infractoras que impliquen ya sea, un mismo objeto infractor o varios, que pueden hacer necesario el despliegue de la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley.

9. Si el partido o la agrupación política presenta **condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos**. Las sanciones que puede imponer a los partidos políticos el Consejo General, con base en sus facultades legales, deberán en cualquier caso, considerar en términos generales, condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables derivadas de la revisión practicada, sin dejar pasar que la imposición de sanciones guarde relación con las faltas cometidas.

10. Si **contraviene disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias**. Los ordenamientos legales aplicables al procedimiento de revisión de los informes financieros de los partidos políticos comprenden disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias, los cuales confieren, prerrogativas y derechos a los partidos políticos, además, imponen obligaciones a éstos que son de forzoso cumplimiento y cuya desatención implica la violación a la normatividad electoral (Constitucional, legal y reglamentaria, según sea el caso) y, por ende, admite la imposición de una sanción, la cual atenderá a la trascendencia de la norma trasgredida.

11. Si **ocultó o no información**. En materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, es obligación de éstos rendir informes financieros al organismo electoral en los términos de ley. Cuando se detecte y se acredite que el partido político ocultó información, con lo que, se obstaculice la adecuada fiscalización de sus recursos, es deber de la autoridad electoral ponderar tal situación como atenuante al momento de fijar la sanción.

12. Si con la **individualización de la multa no se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político o de la agrupación**. En la aplicación de las sanciones, particularmente en la graduación e individualización de estas, es decir, el monto de la multa aplicable, se observará el mandato constitucional de *"garantizar que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades"*, es pues, que surge la obligación correlativa de la autoridad electoral de verificar que la capacidad económica del infractor sea suficiente para enfrentar la sanción que se le imponga, valorando además que el partido está en posibilidad de pagar una sanción de determinada proporción, sin que ello afecte su operación ordinaria y su funcionamiento cotidiano, y sin que resulten éstas excesivas o ruinosas, con el objeto de no vulnerar el alcance que los fines partidistas persiguen (*promover la participación del*



pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo), por ser estos de interés público.

13. La gravedad de la infracción a las obligaciones prescritas en la ley. Al respecto, para la correcta imposición de sanciones sirve de apoyo el criterio sostenido en la jurisprudencia, emitida por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, cuyo rubro y texto se transcribe a continuación:

**“MULTAS. DEBEN EXPONERSE LAS RAZONES QUE DETERMINEN LA GRAVEDAD DE LA INFRACCION.** Para la correcta imposición de una sanción no basta la simple cita del precepto legal en que se funda, ya que debe determinarse la gravedad de la infracción y para ello es menester que las autoridades razonen pormenorizadamente las peculiaridades del infractor y de los hechos motivo de la infracción especificando la forma y manera como influyen en su ánimo para detenerla en cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, justificando así el ejercicio de su arbitrio para la fijación de las sanciones con base en la gravedad de la infracción.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte:

Volumen 70, página 49. Amparo directo 560/74. Unigas, S.A. 4 de octubre de 1974.

Unanimidad de votos. Ponente: Felipe López Contreras.

Volumen 84, página 62. Amparo directo 600/74. Combustibles Licuados y Equipos, S.A. 14 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 84, página 62. Amparo directo 813/74. Compañía Mexicana de Gas Combustible, S.A. 31 de enero de 1975. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 84, página 62. Amparo directo 819/74. Unigas, S.A. 31 de enero de 1975.

Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 74, página 43. Amparo directo 39/75. Unigas, S.A. 28 de febrero de 1975.

Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

**Genealogía:**

Informe 1974, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 137.

Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 125.”

XVII. Que, de conformidad con lo establecido por los artículos 82, párrafo cuarto de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco y 40; primer párrafo del reglamento de la materia, este Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de



Jalisco, procede a analizar el dictamen definitivo de fecha **10 diez de agosto de 2007 dos mil siete** emitido por la otrora Comisión Revisora del Financiamiento a los Partidos Políticos, basándose en el expediente integrado para tal efecto, tomando en consideración, además, los argumentos y la documentación presentada por el instituto político en su comparecencia a este procedimiento administrativo; lo anterior, a efecto de determinar la procedencia del referido dictamen y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes a las observaciones, de conformidad con los artículos 348 y 349 de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, en los términos siguientes:

A) Tal como se desprende del inciso 1) del apartado IV del dictamen definitivo emitido con fecha diez de agosto de dos mil siete por la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** no se le imputaron observaciones respecto de la revisión a la forma de la presentación de los informes, razón por la cual, no existe materia de análisis para el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

B) Tal como se desprende del inciso 2) del apartado IV del dictamen definitivo emitido con fecha diez de agosto de dos mil siete por la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** no se le imputaron observaciones respecto de la revisión en cuanto a la documentación solicitada mediante oficio, razón por la cual, no existe materia de análisis para el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

C) Tal como se desprende del inciso 3) del apartado IV del dictamen definitivo emitido con fecha diez de agosto de dos mil siete por la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** no se le imputaron observaciones respecto a la revisión relativa al origen de los recursos, razón por la cual, no existe materia de análisis para el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

D) Tal como se desprende del inciso 4) del apartado IV del dictamen definitivo emitido con fecha diez de agosto de dos mil siete por la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** incurrió en la siguiente irregularidad:

*“4) Como se observa en el capítulo IV, inciso D), punto 1) del dictamen preliminar, se hizo del conocimiento del instituto político lo siguiente:*

*“...1. Mediante prueba de egresos, la Comisión Revisora del Financiamiento a los Partidos Políticos, verificó el total de los gastos reportados por el Partido Revolucionario Institucional*



que ascienden a la cantidad de \$5,863,526.31 (Cinco millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos veintiséis pesos 31/100 M.N.) en el periodo sujeto a revisión (Julio a Diciembre de 2005), de los cuales se observan irregularidades en la justificación de diversos egresos por la cantidad de \$110,060.97 (Ciento diez mil sesenta pesos 97/100 M.N.), por los conceptos, motivos y montos que se detallan en el Anexo II, el cual forma parte integral del presente dictamen.

La ausencia de requisitos en la documentación que justifica los egresos señalados contraviene lo dispuesto por los artículos 18 y 19 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco y consecuentemente, lo dispuesto por dicho artículo, en relación con lo dispuesto por los artículos 63 fracción XIII, 82 y 132 fracción XXXIII de la Legislación electoral vigente en el Estado de Jalisco; así como 1 y 2 del reglamento de la materia. ...”

Cabe señalar que tal y como quedó asentado en el punto 9° de los antecedentes del presente dictamen, el instituto político compareció a dar contestación al dictamen preliminar emitido por esta Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, formulando en lo conducente las aclaraciones siguientes:

“... 5.- En el mismo apartado V inciso D) punto 1, se observan gastos por \$ 110,060.97 (Ciento diez mil sesenta pesos 97/100 M.N.) , se solicita copia de la identificación de algunas personas para lo cual tengo que decir que son personas que laboran desde el 2004, y cuyas identificaciones con anterioridad se habían enviado; aun así deseo solventar al máximo las observaciones por lo que remito nuevamente copia certificadas de las credenciales para votar con fotografía.

Así mismo se observan gastos en la póliza PD29905 de fecha 30 de septiembre de 2005, se observa factura caduca, a lo que tengo que decir que nos remitimos a lo señalado y que soportamos el gasto debidamente pero paso desapercibida la fecha de vencimiento del documento que es el mismo caso de la póliza PD299703 de fecha 31 de julio de 2005; de cualquier manera se solicito reposición del documento al proveedor; reiterando que existe certeza en el gasto.

Por su parte se observa en la póliza 944 de fecha 27 de julio de 2005, el gasto por \$115.00 (Ciento quince pesos 00/100 M.N.) Por fecha incompleta, para lo cual nos remitimos al proveedor e investigar la fecha de la copia de la factura que obra en sus archivos habiéndose informado que la fecha correcta corresponde al día 27 de julio de 2005, que se encuentra comprendida dentro del periodo sujeto a revisión.



*Se observa la póliza PD299803 y PD299804, Por anexas comprobantes a nombre de otra persona diferente a nuestra razón social, para lo cual tengo que decir que se ha celebrado un contrato de comodato con la persona propietaria del celular según se puede identificar en el comprobante, me permito anexas copia del mencionado contrato para mayor aclaración.*

*La observación de las pólizas 1038, 1042 y 1049 es por lo mismo motivo que las anteriores, para lo que tengo que decir que dicho gasto corresponde al servicio telefónico de la línea 013173812040, la cual opera en las oficinas del comité municipal de Autlán dicha línea fue comprada por la persona que aparece en los comprobantes sin embargo la facturación y el servicio son para el comité ya mencionado, de conformidad con el contrato de comodato celebrado mismo que acompaño.*

*Se observa la póliza PD-2991203, por la cantidad de \$642 (Seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.) Por ser un gasto que no corresponde a actividades partidistas, a lo cual tengo que decir que no fue cubierto con recursos del partido y esta descontado del monto total de la factura, pido se haga la verificación del cálculo aritmético.*

*Por su parte se hacen observaciones en las pólizas PD299703, 1342 Y 1357, Porque existen comprobantes que corresponde a periodos anteriores.*

*Dichos gastos fueron cubiertos cuando se presentaron para su cobro, de lo cual la secretaria de finanzas ignoraba de le existencia de los mismos pero al existir certeza en el gasto se cubrieron...”.*

*Una vez consideradas las manifestaciones realizadas en el escrito de contestación al dictamen preliminar así como la documentación anexa al mismo, esta Comisión Revisora del Financiamiento a los Partidos Políticos determinó que se solventaron parcialmente las observaciones.*

*Atendiendo a tal circunstancia, tal como se señala en el punto 10 de antecedentes, con fecha 14 catorce de marzo de 2006 dos mil seis, mediante oficio número 030/2007 comisión revisora requirió de nueva cuenta al instituto político sujeto a revisión a efecto de que solventara dichas irregularidades.*

*En atención a dicho requerimiento el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fecha 19 diecinueve de abril de 2006 dos mil seis presentó diversa documentación comprobatoria solventando parcialmente las observaciones, por lo que del total de los gastos reportados por el Partido Revolucionario Institucional en el periodo sujeto a revisión (Julio a Diciembre de 2005), mismos que ascienden a la cantidad de*



\$5,863,526.31 (Cinco millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos veintiséis pesos 31/100 moneda nacional) subsisten irregularidades por un importe de \$2,277.00 (Dos mil doscientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por los conceptos, motivos y montos que se detallan en el anexo I el cual forma parte integral del presente dictamen y tal y como se describe a continuación:

CONCEPTO	CANTIDAD
Egresos sin requisitos del Art. 18	\$ 2,277.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,277.00</b>

Con base en lo anterior, esta Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos determina que las conductas desplegadas por el partido político sujeto a revisión enunciada en el párrafo que antecede, contraviene lo señalado por el artículo 18 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, en relación con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XIII, 82 y 132, fracción XXXIII de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, así como 1 y 2 del Reglamento de la materia.”

Por su parte, el anexo I antes referido, señala:

ANEXO I							
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL							
DETERMINACION DE EGRESOS OBJETADOS MEDIANTE PRUEBA DE EGRESOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2005							
POLIZA			CUENTA BANCARIA	IMPORTE SUBSISTENTE	REFERENCIA	MOTIVO DE LA OBJECCION	Clave Obj.
TIPO	NUMERO	FECHA					
DIARIO	PD29905	30-Sep-05		552.00	3634	EGRESOS SIN REQUISITOS DEL ART. 18 INCISO (A) DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA (Proveedor Ana Bertha Pinto Mejía, pago de 8 horas de peritaje por Ciudad Guzmán, factura caduca venció en julio 05 y fue expedida el día 24 de sept.-05 de conformidad con el art. 29-A del CFF) El partido acepta haber pasado por desapercebido la fecha de vencimiento del comprobante.	22
DIARIO	PD299703	31-Jul-05		1,725.00	2270	EGRESOS SIN REQUISITOS DEL ART. 18 INCISO (A) DEL REGLAMENTO DE LA MATERIA (Proveedor Julio Cesar Olmos Contreras, pago de publicación por toma de protesta del comité directivo municipal de Vallarta, factura caduca venció el 13-marzo-05 y fue expedida el día 01-julio-05 de conformidad con el art. 29-A del CFF) El partido acepta haber pasado por desapercebido la fecha de vencimiento del comprobante.	22
<b>T O T A L :</b>				<b>\$ 2,277.00</b>			

Respecto de dicha observación, el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** al dar contestación al dictamen definitivo señaló lo siguiente:



*“En respuesta a su similar de 3 de Diciembre de 2007, en el que notifica a este Instituto Político, el contenido del dictamen definitivo relativo al segundo semestre del año 2005, para que contesten por escrito lo que a nuestro derecho corresponda y aportemos las pruebas que a nuestro interés convenga. Después de una minuciosa inspección de dicho dictamen, podemos inferir que se nos esta requiriendo aclarar lo contenido en el Anexo I **“Determinación de Egresos Objetados Mediante prueba de Egresos Correspondientes al segundo semestre de 2005”** en el que se nos objetan dos pólizas de diario No. PD29905 de fecha 30-Sep-05 por \$552.00 (quinientos cincuenta y dos pesos 00/100) y PD299703 de fecha y 31-Jul-05 por \$1725.00 (mil setecientos veinticinco pesos 00/100), por no cumplir con los requisitos estipulados en el Art. 18 inciso A) del reglamento en la materia, específicamente el requisito quebrantado se refiere a la presentación de dos facturas caducas. Al respecto le informamos que este Comité Directivo Estatal por concepto de Secretaría de Administración y Finanzas, ha intentado mediante los medios posibles de que los proveedores Ana Bertha Pinto Mejia y Julio Cesar Olmos Contreras, nos cambien, dichas facturas, desafortunadamente no hemos logrado encontrar respuesta favorable a nuestra solicitud, argumentando en ambos casos que el plazo para poder requerir el cambio de factura ya termino, que ya han pasado dos años y que no es posible atender nuestra solicitud. Por lo tanto no nos fue posible solventar dicha observación.”*

Tal como fue señalado con anterioridad, el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** compareció en tiempo y forma a realizar la manifestación anterior; sin embargo, para este órgano electoral dichas aseveraciones no son suficiente para tener por desvirtuada la irregularidad contenida en el dictamen definitivo.

Lo anterior tomando en consideración el valor probatorio pleno que como prueba documental pública reviste el dictamen definitivo de la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, acorde en lo previsto por los artículos 375, fracción I, inciso b) y 376 de la otrora Ley Electoral del Estado de Jalisco, ya que este Consejo General determina que se tiene por acreditada la infracción realizada por dicho partido político, consistente en que el egreso no se encuentre soportado con la documentación que reúna los requisitos que señalan las disposiciones fiscales para ser considerados deducibles del impuesto sobre la renta, de conformidad a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 18 del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Ello es así, ya que en el presente caso, los documentos cuentan con la fecha de caducidad vencida, siendo que la primera fue expedida el día veinticuatro de septiembre de dos mil cinco y su vencimiento es de fecha cinco de julio de dos mil cinco y la segunda expedida el día uno de julio de dos mil cinco y vendida el con fecha trece de marzo de dos mil cinco, documentos que aportó el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** a fin de acreditar los



pagos de ocho horas de perifoneo en Ciudad Guzmán y el pago de publicación pro toma de protesta del comité directivo municipal de Vallarta, y mismos que no reúnen los requisitos fiscales señalados por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, toda vez que cuentan con fecha de caducidad vencida, incumpliendo así con uno de los requisitos señalados en dicho numeral.

En virtud de lo anterior, por la conducta descrita en los párrafos precedentes, se actualiza la infracción al violentar el artículo 18, inciso a) del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco.

En ese sentido, tenemos que el artículo 350, fracción V de la legislación estatal electoral, textualmente señala: *"Artículo 350 ... V. El Instituto Electoral, para fijar la sanción correspondiente, tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa; ..."*

Con base a lo anterior este Consejo General procede a seleccionar y graduar la sanción que en derecho corresponde, considerando los elementos siguientes:

- a) **Determinación del tipo de conducta.** El tipo de la conducta realizada por el partido político es de tipo acción, ya que el partido político tiene la obligación de utilizar los recursos financieros que maneja, para los objetivos específicos que la ley le impone, de conformidad con lo establecido por los artículos 73 y 74 de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco y conforme a las disposiciones reglamentarias contenidas en el inciso a) del artículo 18 del Reglamento de la materia.
- b) **Determinación de circunstancias de modo, tiempo y lugar.** El PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL realizó egresos fuera de la normatividad fiscal electoral correspondiente, incumpliendo así con lo señalado en el artículo 18, inciso a), del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco.
- c) **Determinación de negligencia o intencionalidad del infractor y, en su caso, los medios utilizados.** El partido político no ha sido sancionado por irregularidades similares, por lo que esta autoridad no puede concluir que la irregularidad observada se deba a una intención o negligencia deliberada.
- d) **Determinación de si las normas transgredidas son constitucionales, legales o reglamentarias, así como su trascendencia.** Como fue señalado con anterioridad, la



conducta desplegada por el partido político contravino lo señalado por el numeral 18, inciso a), del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco en relación con lo establecido por el numeral 29-A del Código Fiscal de la Federación.

**e) Determinación de las consecuencias y efectos de la falta cometida.** La conducta ilícita del partido político violentó principios sustanciales en materia de fiscalización y de financiamiento de partidos políticos, ya que, impidió la adquisición de certeza y transparencia de la veracidad de lo reportado en los informes financieros en los que se refiere a los egresos.

**f) Determinación de la existencia o no de reincidencia.** Para efectos de determinar la sanción aplicable por la comisión de la falta administrativa, este Consejo General toma en consideración que el partido político no ha reincidido en este tipo de irregularidades, ya que a la fecha no ha sido sancionado por una irregularidad de este tipo.

**g) Determinación de si es o no, una conducta sistemática.** Con base en lo anterior, y tomando en consideración las constancias que obran en el procedimiento sancionador, resulta que no existen elementos que nos lleven a concluir que el partido político actuó de manera sistemática al momento de la infracción, ya que si bien realizó la comprobación indebida de un egreso, también tenemos que hubo otros gastos similares que sí fueron efectuados y comprobados conforme a la normatividad electoral vigente.

**h) Determinación de singularidad o pluralidad de infracciones.** La autoridad fiscalizadora corroboró que el partido político realizó otros egresos conforme a la normatividad electoral vigente, por lo que la presente conducta se constituye en una sola infracción, por lo que resulta procedente el aplicar una sola sanción por esta infracción.

**i) Si con la individualización de la sanción se afecta, o no, sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político.** En el presente caso al estimarse procedente imponer una sanción consistente en una reducción de la ministración del financiamiento público del 3 % que le correspondió al partido político al momento en que se cometió la infracción, atendiendo a las circunstancias expresadas con antelación y en razón a la calificación que se haga de la infracción, por tanto, la imposición de dicha sanción de ninguna manera podría afectar el desarrollo de las actividades de dicho partido político, ni provocar su insolvencia o imposibilidad de pago hacia sus proveedores o empleados.



j) **Determinación de la gravedad de la falta.** En el caso que nos ocupa, se determina que la conducta infractora desplegada por el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, merece la calificación de leve, ello atendiendo a que si bien es cierto que se acreditó la infracción conforme al artículo 348, fracción IV de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, misma que resulta sancionable en los términos del artículo 349, fracción II de abrogada la ley de la materia, consistente en la realización de un egreso indebido tal y como se detalló en el cuerpo de la presente resolución, ya que dicha conducta no impidió efectuar el procedimiento de fiscalización a cabalidad, al contar con todos los elementos necesarios para efectuar la revisión.

Ahora bien, de conformidad con lo señalado en los artículos 348, fracción IV y 349 fracción II de la abrogada Ley Electoral del Estado de Jalisco, si se comprueba que un partido político ha incurrido en una falta administrativa consistente en realizar un egreso que no se encuentre soportado con la documentación que cumpla con los requisitos que señalan las disposiciones fiscales para ser considerados deducibles del impuesto sobre la renta, en este caso por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, específicamente con el requisito establecido por la fracción III de dicho numeral consistente en que el comprobante respectivo cuente con la fecha de expedición, el Instituto Electoral del Estado de Jalisco aplicará las sanciones de:

- a) Reducción de hasta el 30% de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda, hasta por los 2 años siguientes a aquel en que se cometa la infracción; o
- b) Supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento que le corresponda, hasta por 1 año siguiente a aquel en que se hubiere cometido la infracción.

En ese sentido, las faltas administrativas analizadas en este punto, se sancionan en los términos de puntos los resolutivos de la presente y tomando en consideración lo antes señalado.

E) Tal como se desprende del inciso 5) del apartado IV del dictamen definitivo emitido con fecha diez de agosto de dos mil siete por la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** no se le imputaron observaciones respecto de la revisión global (origen y aplicación de recursos), razón por la cual, no existe materia de análisis para el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

XVIII. Que, una vez analizadas la totalidad de las irregularidades señaladas por la Comisión Revisora del Financiamiento de los Partidos Políticos, en su dictamen definitivo y determinada la procedencia de cada una de ellas en atención a la motivación y fundamento legal establecida en cada caso, como se asienta en el considerando que antecede, este Consejo General encuentra procedente sancionar, en los términos en que se detallan en los resolutivos de la



presente resolución las conductas desplegadas por el **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL** consistentes en:

1. Egresos, sin requisitos del artículo 18 del reglamento.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 14, párrafo primero y tercero; 16, y 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracción IV y 13, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 63, fracción XIII, 132 fracciones, XXVI, XXXIII y LIV, 348, fracción IV, 349, fracción II y 350, fracción V de la abrogada Ley Electoral del Estado; 1, 2, 18 y 40 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Financiamiento Público, Lineamientos para el Financiamiento Privado y Gastos de Campaña de los Partidos Políticos Registrados o Acreditados ante otrora Instituto Electoral del Estado de Jalisco, se resuelve conforme con los siguientes puntos:

#### **RESOLUTIVOS:**

**PRIMERO.** Por los motivos y fundamentos expuestos en el inciso D) del considerando XVII de la presente resolución, se impone al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**, la sanción consistente en \$16,496.69 (Dieciséis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 69/100moneda nacional), equivalente al 3%, por un mes, de la ministración que por financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes le correspondió de forma mensual durante el segundo semestre del año dos mil cinco, periodo en que cometió la falta administrativa.

**SEGUNDO.** Notifíquese al **PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**.

Guadalajara, Jalisco, a 21 de enero de 2009.

  
**LICENCIADO DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ PÉREZ**  
**CONSEJERO PRESIDENTE**

  
**LICENCIADO CARLOS OSCAR TREJO HERRERA**  
**SECRETARIO EJECUTIVO**

LRMV/LMRB/HJDS

Página 27 de 27

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO**

Florencia 2370, colonia Italia Providencia,  
C.P. 44648, Guadalajara, Jalisco, México

(33) 3641-4507 / 3641-4509 / 3641-4518,  
01 800-7017 881, [www.iepcjalisco.org.mx](http://www.iepcjalisco.org.mx)